

La educación en la era neoliberal

por Adriana Puiggrós

Desde el fin de la 2ª Guerra Mundial se reconocen tres momentos históricos durante los cuales la educación argentina y latinoamericana ha sido especialmente afectada. A partir de la postguerra y hasta mediados de 1980 la educación fue considerada un derecho universal y una de las prioridades de los organismos de la familia de la Naciones Unidas, en el marco de políticas desarrollistas. A partir de mediados de aquella década el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo intervienen de manera mucho más directa en la programación, financiamiento y gestión de la educación. La deuda externa acumulada por nuestros países es usada como justificativo para insistir en la reducción de los aportes estatales en todos los aspectos de la vida nacional, al mismo tiempo que se aumenta el compromiso con préstamos destinados a reformas educativas. Al comenzar el nuevo milenio se produce otro cambio de enorme repercusión en la educación: las corporaciones más poderosas extienden sus intereses a la educación, convirtiéndola en un gran mercado. Las políticas soberanas llevadas adelante por gobiernos democráticos o nacionalistas populares, no alcanzan a evitar la profunda penetración de esa política.

Los comienzos del neoliberalismo

Durante las décadas de 1980 y 1990 se produjeron cambios estructurales a nivel internacional que afectaron de manera directa a los países latinoamericanos. El ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido, marcaron la finalización de las políticas liberales y keynesianas para dar paso a las que se denominaron *neoliberales*. Éstas no consisten solo en la promoción del libre mercado y la prioridad de los intereses de las grandes potencias sobre los países pobres, sino en una inmensa concentración de riqueza en mínimo porcentaje de personas, a la vez que el empobrecimiento de las grandes mayorías. El proceso de

globalización, que llevaba ya varios siglos, experimentó un salto cualitativo, ayudado por la revolución tecnológica, pero dirigido por los sectores poderosos de los países ricos. Transformaciones profundas de tipo cultural y educativo son acompañantes indispensables de ese proceso. En pocas décadas corporaciones financieras, tecnológicas, mediáticas, editoriales, fueron objeto de una enorme concentración y comenzaron a ejercer su poder no solamente dentro de los organismos internacionales sino de manera directa en los países. Se produjo un reacomodamiento de posturas en el interior de estos últimos.

Para el avance de las corporaciones sobre la educación han sido particularmente significativos los sucesivos retiros de fondos de los Estados Unidos de la UNESCO desde 1984 que culminará con su renuncia total como miembro de esa organización a fines de 2018; el Consenso de Washington, en 1989; el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995 (cuyo apartado IV establece la “liberación progresiva” de la educación por parte de los países miembros), la inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la OMC en 1999; el Acuerdo de Bolonia de 1999.

El mercado avanzó contra los consensos internacionales derivados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los cuales la educación había quedado establecida como un derecho. Por otra parte, desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que vendan masivamente empresas, ONG y fundaciones de manera transnacional. La flexibilización laboral de la contratación docente resulta una prioridad para grandes inversores en el nuevo mercado mundial del rubro educación, que mueve billones de dólares anuales. La disminución del personal docente con la excusa de su posible reemplazo por medios tecnológicos, y la rebaja drástica de sus salarios, se instalaron como el argumento natural de los nuevos propietarios de la educación.

La prioridad de las ganancias particulares sobre los derechos sociales desplazó el lenguaje pedagógico para sustituirlo por categorías de uso en la economía y especialmente en el mundo de los negocios. Eficiencia, eficacia, equidad, accountability, management, arancelamiento, tercerización, fueron algunos de los términos que sustituyeron a la educación común, la igualdad de derechos, la democracia educativa y la educación pública; y

fueron deformadas categorías como *evaluación*, usándose para establecer escalas (ranking) que organicen el mercado.

Los actuales tratados de libre comercio incluyen a la educación con la finalidad práctica de comprar y vender. La televisión e Internet están plagados de publicidades de empresas de autoeducación en múltiples rubros. Actualmente puede accederse a casi todos los niveles y modalidades de educación a través de ofertas privadas a distancia o presenciales, que difieren de la enseñanza privada tradicional. La diversidad de las ofertas con criterios de mercado (contenidos, paquetes de evaluación, cursos de capacitación docente, asesoría administrativa, entre muchos otros) tiende a romper la unidad de la institución educativa y a promover el reparto de funciones en entidades comerciales. Por ese camino, la escuela o el colegio llegarán a ser una cáscara vacía, dedicada a acreditar actividades realizadas en otros espacios y a ejercer como intermediarias entre aquellas entidades y el Estado.

En nuestro país, la situación que hasta hace pocos años era vista solo como un peligro futuro, se manifiesta desde que asumió el gobierno Mauricio Macri sin reparos, como una compleja trama de inversiones privadas, normativas locales y nacionales, tratados internacionales, arreglos entre fundaciones privadas y establecimientos públicos, y situaciones de hecho de privatización que se presentan como experiencias pedagógicas. El shopping de educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios y especialmente en la Red Federal de Formación Docente, se ha generalizado cobrando dimensiones inéditas. En los medios se instaló una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los soportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Apple, Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes. Desde el arco oficial no hay disimulo al respecto, porque consideran que es lo adecuado. Paralelamente, se suman cada vez más fundaciones y empresas destinadas a vender servicios educativos, tales como GEM, *Junior Achievement*, EIDOS o programas como *Teach for America* y Educar y Crecer.

Por ejemplo, este último programa tiene como donantes a la Fundación Benito Roggio, Chevron Argentina y Johnson & Johnson. Usan un modelo de “franquicia social”

destinado a promover que diversos actores sociales se dediquen a la educación. Les facilita material didáctico, capacitación y asesoramiento. Sin mucho esfuerzo de imaginación leemos este programa acompañándolo como música de fondo con el tintineo de la frase múltiples veces repetida por conductores de programas televisivos redactores de editoriales de diarios liberales y economistas devenidos en pedagogos: “¡La Escuela Pública está en decadencia!”.

La acción siguiente es la convocatoria a voluntarios para que reemplacen a los maestros y profesores, condenados. No se trata de reacciones circunstanciales o un mal humor pasajero de algunos funcionarios. Por el contrario, los voluntarios sustituyendo a los docentes profesionales son sujetos centrales de la compra-venta de educación. Se trata de comenzar introduciendo “co-docentes” en las escuelas primarias y técnicas a personas contratadas por “*Teach for Argentina*”, sin capacitación, fuera del convenio colectivo de trabajo, como monotributistas con bajos salarios.

La mencionada fundación es de la familia de “*Teach for all*” y “*Teach for America*”, dedicadas a la formación de líderes y educadores en comunidades indígenas y marginales, especialmente en Uganda y Ghana, a las cuales ellos consideran naturalmente inferiores. Acordar que organizaciones con esa ideología penetren nuestras escuelas reemplazando a los docentes, es lógico que aparezca como una solución para quienes ven la educación pública argentina poblada de seres incultos y culturalmente atrasados. El propio presidente Mauricio Macri lamentó que exista “una terrible inequidad, de aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene *que caer* en la escuela pública”.

Por eso es indispensable que la ciudadanía comprenda que no se está atacando tan solo los derechos de los docentes sino los suyos propios. Son los derechos de los familiares y de los propios niños y adolescentes los perjudicados cuando el gobierno se niega a sentarse en la paritaria, suspende la capacitación de los docentes, los reprime y se dedica a hacer negocios con la educación pública.

Bibliografía:

Ctera (2016) Tendencias privatizadoras de y en la educación argentina, Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”, Secretaría de Educación, Ctera.

*Feldfeber, M; Duhalde M. y otros (2018) La privatización educativa en Argentina, Instituto de Investigaciones Pedagógicas "Marina Vilte", Secretaría de Educación, Ctera.

*Filmus D. compilador (2017) Educar para el mercado, Octubre.

*Puiggrós A. (2017) Adiós Sarmiento, Colihue, 3ª. parte

*Puiggrós A. (2018) Qué pasó en la educación argentina, Galerna (en digital, actualización

(